

Santiago, quince de abril de dos mil veinticinco.

Al escrito folio 21: a lo principal, téngase presente; al otrosí, a sus antecedentes.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que el abogado don Sergio Hernández Pérez, en representación de don Juan Ramón Jesús Solís González, demandante en autos sobre declaración de relación laboral, despido injustificado, nulidad del despido y cobro de prestaciones, Rit O-1846-2024, seguidos ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta, dedujo recurso de queja en contra de los integrantes de una sala de la Corte de Apelaciones de esa ciudad, ministra señora Virginia Elena Soublette Miranda, ministro señor Eric Darío Sepúlveda Casanova y fiscal judicial señora María Teresa Quiroz Alvarado, quienes con fecha cuatro de marzo de 2025, confirmaron la resolución apelada que declaró la caducidad de la acción de despido injustificado interpuesta.

Manifiesta que la decisión objetada fue pronunciada con falta o abuso, pues interpuso demanda de declaración de relación laboral, despido injustificado, nulidad del despido y cobro de prestaciones, sin embargo, no tomó en consideración que con la primera acción se pretenden las indemnizaciones provenientes de tal declaración, y por tanto, no se hace aplicable lo dispuesto en el artículo 168 del Código del Trabajo, que parte de la premisa de una relación laboral reconocida por el empleador, lo que no ocurre en la especie, por lo que debe atenderse al plazo de prescripción previsto en el inciso primero del artículo 510 del referido cuerpo legal, interponiendo, por tanto, la demanda dentro de plazo y quedando supeditada la acción de despido injustificado a la declaración de relación laboral, por lo que al declarar la caducidad de dicha acción se conculcó la garantía del debido proceso como el principio protector que rige en la legislación laboral.

Solicita se acoja el recurso, se deje sin efecto la resolución recurrida, y en su lugar, se dicte una que revoque la de primera instancia, disponiendo que el tribunal prosiga con la tramitación de la acción deducida.

Segundo: Que, al evacuar el informe de rigor, los recurridos señalaron que efectivamente confirmaron la resolución que declaró la caducidad de la acción por despido injustificado, pues transcurrieron los plazos que contempla el artículo 168 del Código del Trabajo para declarar un despido como injustificado, ya que desde la terminación de los servicios transcurrieron más de sesenta días hábiles, por lo



que al tratarse de un término de caducidad, así debe declararse, a diferencia de las otras prestaciones reclamadas, a cuyo respecto se aplica el artículo 510 del referido cuerpo legal, quedando subsistente las acciones respectivas, lo que no se contradice con la acción de declaración de existencia de una relación laboral, respecto a la que no procede la caducidad, por lo que estiman que no incurrieron en falta o abuso grave que implique corregir su conducta por la vía disciplinaria.

Tercero: Que el recurso de queja se encuentra contemplado en el Título XVI del Código Orgánico de Tribunales, que trata "De la jurisdicción disciplinaria y de la inspección y vigilancia de los servicios judiciales", y está reglamentado en su párrafo primero que lleva el epígrafe de "Las facultades disciplinarias".

Cuarto: Que, conforme al artículo 545 de ese cuerpo legal, el recurso de queja solamente procede cuando en la resolución que lo motiva se haya incurrido en falta o abuso constituidos por errores u omisiones, manifiestos y graves.

Quinto: Que, al efecto, es importante considerar que el concepto que introduce el artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales, en orden a que el recurso de queja tiene por exclusiva finalidad corregir "faltas o abusos graves" cometidos en la dictación de resoluciones de carácter jurisdiccional, está íntimamente relacionado con el principio elaborado por la doctrina procesal de la "trascendencia", y que, en el caso concreto, dice relación con la necesidad de que la falta o abuso tenga una influencia sustancial, esencial, trascendente en la parte dispositiva de la sentencia (Barahona Avendaño, José Miguel, *El recurso de queja. Una Interpretación Funcional*, Editorial Lexis Nexis, 1998, p. 40); situación que puede configurarse, por ejemplo, cuando por un incorrecto análisis de los antecedentes del proceso y de la normativa aplicable se priva a una parte del derecho a un debido proceso o a la tutela judicial efectiva.

Sexto: Que, del examen de los antecedentes obtenidos del sistema computacional se advierte que:

a) El 15 de diciembre de 2024 don Juan Ramón Jesús Solís González demandó al Fisco de Chile en representación de la Fuerza Aérea de Chile y a la Dirección de Aeronáutica Civil, indicando que ingresó a prestar servicios el 01 de enero de 2013, como operador de seguridad aeroportuaria, realizando labores bajo subordinación y dependencia, configurándose una relación laboral, la que concluyó el 9 de septiembre 2024 con la comunicación por carta certificada que le informó la aplicación de la medida de destitución.

b) La demandante no interpuso reclamo administrativo.



c) La judicatura de instancia, al proveer la demanda el 02 de enero de 2025, señaló que transcurrió el plazo previsto en el inciso primero del artículo 168 del Estatuto del ramo, y declaró de oficio la caducidad de la acción de despido injustificado.

d) La Corte de Apelaciones de Antofagasta, conociendo de la apelación de la resolución precedente, por sentencia de 04 de marzo de 2025, la confirmó.

Séptimo: Que, como consta de los antecedentes del proceso, la demanda tiene por objeto que se declare la relación laboral. Tal precisión es relevante, pues se controvierte expresamente la existencia de un vínculo laboral entre las partes y, consecuentemente, la existencia del despido que la demandante alega, por lo que se yerra al separar la acción de despido injustificado de la anterior, por cuanto es evidente que no puede aplicarse lo dispuesto en el artículo 168 del Código del Trabajo, ni de ningún otro precepto, respecto de un período cuya naturaleza laboral está controvertida y que aún no ha sido asentada por la judicatura del ramo.

Por consiguiente, la acción de despido injustificado derivada de un vínculo cuya real naturaleza forma parte del conflicto sometido al conocimiento de la judicatura laboral, queda supeditada, en los aspectos sustantivos y adjetivos, incluido el plazo para su interposición, a la acción de declaración de relación laboral, pues no puede existir en forma independiente de aquella.

Octavo: Que, a mayor abundamiento, esta Corte se ha pronunciado en reiteradas oportunidades en el sentido que el plazo de prescripción de la acción para la declaración de una relación laboral es de dos años y que se contabiliza desde el término del vínculo. Así lo ha dicho en las sentencias dictadas en las causas Rol N° 43766-2017, 43763-2017, entre otras, y más recientemente, en los antecedentes N° 104276-2020, 45058-2021 y 1994-2022, en la última de las cuales se razonó que *“el derecho a reclamar el reconocimiento de una relación laboral que es desconocida por el empleador puede ser impetrada no sólo durante toda su vigencia, sino también después de su finalización, pero en ambos casos, el plazo de prescripción de la acción sólo puede comenzar a correr desde la época en que se le puso término, ello, según la correcta interpretación del inciso primero del artículo 510 del cuerpo legal citado”*; mismo criterio que motiva las decisiones anteriores.

Noveno: Que, en consecuencia, los jueces recurridos incurrieron en falta o abuso al aplicar el plazo de caducidad de la acción de despido injustificado del



artículo 168 del Código Laboral, sin considerar que, en la especie, su ejercicio se encuentra supeditado a aquella que tiene por objeto una declaración judicial relativa a la verdadera naturaleza del vínculo, caso en el cual se puede deducir la excepción de prescripción de la acción, por haber transcurrido el término de dos años desde la conclusión de los servicios, mismo, que, por consiguiente, debe extenderse a la acción de despido injustificado que tiene como fundamento y antecedente esa controversia previa.

Por estas consideraciones y conforme lo dispone el artículo 549 del Código Orgánico de Tribunales, **se acoge** el recurso de queja deducido en contra de los integrantes de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, ministra señora Virginia Elena Soublette Miranda, ministro señor Eric Darío Sepúlveda Casanova y fiscal judicial señora María Teresa Quiroz Alvarado, por haber dictado con falta o abuso la resolución de cuatro de marzo último, y, en consecuencia, **se la deja sin efecto** al igual que la dictada el dos de enero de dos mil veinticinco, por el Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta, en cuanto se declaró de oficio la caducidad de la acción de despido injustificado, debiendo el tribunal dar curso a la referida pretensión.

No se ordena pasar estos antecedentes al Tribunal Pleno, por no existir mérito suficiente para ello.

Regístrese y archívese.

N°6.898-2025.-





Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Andrea Maria Muñoz S., Jessica De Lourdes González T., Mireya Eugenia Lopez M. y los Abogados (as) Integrantes Leonor Etcheberry C., Irene Eugenia Rojas M. Santiago, quince de abril de dos mil veinticinco.

En Santiago, a quince de abril de dos mil veinticinco, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

